

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



JUZGADO NOVENO DE FAMILIA BOGOTÁ D.C. EN ORALIDAD
Bogotá D.C, Siete (07) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: **Acción de Tutela**
Radicación: **2023-00327**

I. ASUNTO:

Dentro de la oportunidad prevista en el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, procede el Juzgado a resolver la acción de tutela instaurada por la señora **DORA MILENA CAICEDO CALLEJAS** en contra de **la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LA VÍCTIMAS**, en adelante **UARIV**.

II. ANTECEDENTES:

2.1.- HECHOS (SÍNTESIS):

2.1.1.- Manifiesta la accionante que es hermana del señor Oscar Caicedo Callejas, identificado con el número de cedula 94.225.668, expedida en Zarzal Valle del Cauca.

2.1.2.- Señala que el señor Oscar Caicedo Callejas, trabajo de forma independiente en ventas de diferentes productos alimenticios- mercancía. A la fecha 23 de mayo de 2023, el señor Oscar Caicedo Callejas depende del cuidado total por parte de la señora Dora Milena Caicedo Callejas.

2.1.3.- Manifiesta que aproximadamente hace 8 años, el señor Oscar Caicedo Callejas fue víctima por desplazamiento forzado, y fue lesionado causando graves daños en su salud, tanto físico. Como mental. Por lo que él no se puede velar por si solo y depende del cuidado de su hermana DORA MILENA CAICEDO CALLEJAS.

2.1.4.- Asegura que, producto de este ataque que recibió el señor Oscar Caicedo Callejas, perdió parte de su movilidad en sus piernas, lo que impide que pueda realizar cosas cotidianas, por lo que la señora Dora Milena Caicedo Callejas, es la que se encarga el 99% de sus actividades como bañarse, cepillarse, comer entre otras funciones. Para tratar de obtener una vida digna.

2.1.5.- Que, en el año 2021 y el año 2022, se le asigno la fecha del pago de la INDEMNIZACION, por parte de Unidad De Reparación De Víctima al señor OSCAR CAICEDO CALLEJAS, por ser considerado VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO. Pero no fue posible ser reclamado el monto de esta indemnización, ya que el señor Oscar Caicedo Callejas, tiene problemas cerebrales que impide que conteste cualquier pregunta por parte de los funcionarios de esta entidad.

2.1.6.- A la fecha no se ha programado nuevamente otro pago de esta

indemnización y la entidad UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS, ha venido dilatando el desembolso aun teniendo conocimiento del Caso del señor OSCAR CAICEDO CALLEJAS.

2.1.7.- Que el día 25/02/2023 con número de Radicación 2022-8550293-2, fue contestado por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas, el derecho de petición radicado ante esta entidad. Mediante el cual se solicitaba el pago de la indemnización, ya que, por inconsistencias a la pregunta de la representante para entrega del pago de la indemnización, le realizo una pregunta a OSCAR CAICEDO CALLEJAS, quien no tiene la capacidad de responder el número de cedula. Se consideró la devolución de este dinero a las cuentas de la DIRECCION DEL TESORO NACIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

Señala que, a la fecha Unidad para la Atención y Reparación integral a las víctimas, aún no han reprogramado nueva fecha para el pago de la indemnización.

Indica que, mediante Escritura Publica 262 con fecha 18 de abril de 2023, en la NOTARIA UNICA DE LA VICTORIA VALLE. Se realizó Designación de persona de Apoyo a la señora DORA MILENA CAICEDO CALLEJAS. Por las condiciones deplorable del señor OSCAR CAICEDO CALLEJAS.

2.2. PETICIÓN:

Solicita:

"PRIMERO: solicito a el HONORABLE JUEZ, Constitucional decretar la protección de los DERECHOS FUNDAMENTALES, que se encuentran consagrados en la Constitución Política de Colombia, Artículo 13, artículo 1, artículo 23, artículo 49 Constitución Política de Colombia 1991, Artículo 25 de la Ley 1448 de 2011.

SEGUNDO: su señora, teniendo en cuenta los hechos, solicito que se ORDENE el pago de esta indemnización por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas, por DESPLAZAMIENTO FORZADO siendo víctima Oscar Caicedo Callejas.

TERCERO: señor Juez, tenga en cuenta el problema de salud del señor Oscar Caicedo Callejas y solicito que este proceso no se siga dilatando por la sostenibilidad Fiscal, ya que en efecto el DERECHO A LA REPARACION DE LAS VICTIMAS ES FUNDAMENTAL Y NO PUEDE SER LIMITADO NEGANDO O DESCONOCIENDO POR RAZONES FISCALES O POR QUE EL PROBLEMA DE CAPACIDAD COGNITIVA DEL SEÑOR OSCAR CAICEDO CALLEJAS."

III. ACTUACIÓN PROCESAL:

Mediante auto del 26 de mayo de 2023 se admitió la acción constitucional (archivo digital 07), en el que se ordenó notificar a las partes, y solicitarle a la entidad accionada contestar el libelo dentro del término de dos (2) días.

3.1. RESPUESTAS:

UARIV (archivo digital 09): Indico que para el caso del señor **OSCAR CAICEDO CALLEJAS** informan que luego de verificar el Registro Único de Víctimas, el señor OSCAR CAICEDO CALLEJAS presentó solicitud de indemnización administrativa en el marco de la Ley 1448 de 2011, la cual fue radicada con el No. 2351987-11156930, en donde se relaciona(n) la(s) siguiente(s) persona(s) que, bajo el procedimiento para otorgar la medida de indemnización administrativa, acreditaron su calidad de destinatario(s).

Señala que se ordenó el pago de la medida de indemnización administrativa aplicando la normatividad vigente para el momento en que se presentó la solicitud, sin embargo, de acuerdo con el reporte entregado por la entidad financiera, el/los destinatario(s), que se relacionan a continuación, no realizaron el cobro de la indemnización antes mencionada, por lo que la Unidad para las Víctimas en aras de salvaguardar los recursos públicos por concepto de indemnización administrativa, se vio en la obligación de constituirlos como acreedores varios sujetos a devolución en cuentas de la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público .

Indica la accionada que se debe realizar el procedimiento de reprogramación de los recursos, para lo cual, la Unidad para las Víctimas a través de un enlace contactará al accionante para asesorarlo en el trámite correspondiente dependiendo de la causal de no cobro de los recursos asignados, esto con el fin de realizar la entrega efectiva de los mismos.

Que, en virtud del principio de participación conjunta, toda solicitud que no cuente con la documentación necesaria para dar trámite al proceso de su indemnización deberá ser complementada por la víctima. Cabe precisar que el proceso de reprogramaciones tiene un tiempo de trámite, dependiendo de la causal de no cobro, toda vez que deben ajustarse nuevamente a los procedimientos internos de pago de la medida

Por lo anterior, sostiene la entidad que no ha existido ninguna vulneración por su parte de los derechos fundamentales de la tutelante o su núcleo familiar, pues ha emitido una respuesta completa, clara, concreta y congruente con lo solicitado, por tal razón se constituye un hecho superado.

Por último, solicita **NÉGAR** las pretensiones invocadas por la señora **DORA MILENA CAICEDO CALLEJAS** en el escrito de tutela, en razón a que la Unidad para las Víctimas, tal como lo acredita, ha realizado, dentro del marco de sus competencias, todas las gestiones necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales, evitando que se vulneren o pongan en riesgo sus derechos fundamentales.

IV. CONSIDERACIONES:

4.1. COMPETENCIA:

Este Juzgado es competente para conocer de la acción de tutela con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1.991.

4.2.- PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN:

La acción de tutela se instituyó por el constituyente de 1991, en el artículo 86 de la Constitución Política, con la finalidad exclusiva de proteger de manera efectiva los derechos fundamentales de las personas cuando estos sean violados o puestos en peligro por acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, estos últimos, en los casos expresamente señalados por la ley.

Sin embargo, el acceso a este procedimiento preferente y sumario es procedente siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial que sea idóneo, apreciado en concreto, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por lo mismo, no es alternativo sino residual.

Según lo previsto en el numeral 2º del Decreto 306 de 1992 (reglamentario del Decreto 2591 de 1991), dicha acción protege exclusivamente los derechos constitucionales fundamentales, por ende, no puede emplearse, para hacer respetar derechos que sólo tengan rango legal, ni para hacer cumplir las leyes, los decretos, los reglamentos o cualquiera otra norma de rango inferior.

4.2.1. DE LOS REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA:

- Legitimación por activa:

El artículo 86 de la Constitución Política dispone el derecho de toda persona de reclamar mediante acción de tutela la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Este precepto constitucional se desarrolla en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, en el que se consagra que *“la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”*.

En el caso bajo examen, la señora **DORA MILENA CAICEDO CALLEJAS** acudió a la acción de tutela para que se protegieran los derechos fundamentales del petición y a la vida digna, del señor **OSCAR CAICEDO CALLEJAS** los cuales afirma están siendo conculcados como consecuencia de la falta de una respuesta fondo por parte de la entidad accionada a su solicitud. Por lo anterior, se encuentra legitimada en la causa por activa para presentar la acción constitucional.

- Legitimación por pasiva

Como quiera que la legitimación pasiva atiende a la capacidad legal de la entidad contra quien se dirige la acción, a efectos de que sea llamada a responder por la vulneración o amenaza de uno o más derechos fundamentales, el inciso primero del artículo 86 Constitucional señala que procede la acción de tutela cuando los derechos fundamentales *“resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública”* o por cualquier particular. A su vez, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 consagra que la

acción se puede invocar contra una autoridad pública que haya vulnerado o amenazado algún derecho de rango constitucional fundamental.

En el asunto *sub-judice*, se encuentra acreditado el requisito de legitimación en la causa por pasiva de la **UARIV**, a la que se le endilga la presunta actuación que se considera lesiva de los derechos fundamentales invocados por la accionante, y que se relaciona con la omisión de darle una respuesta de fondo a su petición.

- Inmediatez

La Corte Constitucional indicó en la Sentencia SU-961 de 1999 que *“La tutela debe interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser procedente en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros”*.

En el presente asunto, se tiene que, la respuesta a la petición por parte del accionante ante la **UARIV**, no se satisface como respuesta de fondo y oportuna por lo cual, este Despacho considera que se cumple con este requisito.

- Subsidiariedad

Al respecto, en Sentencia T-422 de abril 26 de 2001 la Corte Constitucional señaló: *“(…) la naturaleza de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86 de la Carta Política y 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991, es la de ser un medio de defensa judicial subsidiario y residual que sólo opera cuando no existe otro instrumento de protección judicial, o cuando a pesar de existir, se invoca como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, de manera que no puede utilizarse para remplazar los procesos judiciales o administrativos, pues su finalidad no es otra que brindar a las personas una protección efectiva, real y eficaz, para la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales. En consecuencia, riñe con la idea de admitirla a procesos administrativos o judiciales en curso o ya terminados, en cuanto unos y otros tienen mecanismos judiciales ordinarios para la protección de derechos de naturaleza constitucional o legal, que por lo tanto la hacen improcedente”*.

En el presente caso, la parte actora no cuenta con un mecanismo judicial eficaz diverso al que nos ocupa para obtener respuesta de fondo por parte de la entidad accionada, lo que hace viable esta acción.

Establecida entonces la procedencia de la acción de tutela en el caso concreto, se continuará con el examen de los asuntos de fondo.

4.3. ALCANCE DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN:

El derecho de petición se encuentra consagrado en el artículo 23 de nuestra Constitución Política y dispone que: *“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución (...)”*. En torno a este derecho la Corte Constitucional en la sentencia T-081 de 2007, expresó:

“1. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el núcleo esencial del derecho de petición comprende los siguientes elementos o características:

(i) la posibilidad cierta y efectiva de presentar, de manera respetuosa, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;

(ii) la facultad de obtener una respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos previstos en el ordenamiento jurídico;

(iii) el derecho a recibir una respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad analice la materia propia de la solicitud y se pronuncie sobre la totalidad de los asuntos planteados; es decir, que haya correspondencia entre la petición y la respuesta, sin fórmulas evasivas o elusivas;

(iv) la pronta comunicación al peticionario sobre la determinación adoptada, con independencia de que su contenido sea favorable o desfavorable”.

En el mismo sentido, la Sentencia T-957 de 2004 indicó que la respuesta a los derechos de petición debe ser de fondo, pues:

“la Corte Constitucional se ha pronunciado en numerosas oportunidades sobre el contenido y el alcance generales del derecho de petición, en virtud del cual toda persona puede presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, y obtener una pronta resolución. Según se ha precisado en la doctrina constitucional, esta garantía constitucional “consiste no sólo en el derecho de obtener una respuesta por parte de las autoridades sino a que éstas resuelvan de fondo, de manera clara y precisa la petición presentada”. Asimismo, tal respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible, “pues prolongar en exceso la decisión de la solicitud, implica una violación de la Constitución”

A su vez, la Ley 1437 de 2011 modificada por la Ley 1755 de 2015, en su artículo 13 prescribe que: *“(…) Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. (...)”.*

Conforme a lo expresado, las respuestas emitidas por las autoridades en atención a las peticiones elevadas por los particulares deben ser oportunas, prontas y de fondo, es decir, que resuelvan en forma completa y total las solicitudes presentadas, en forma clara, precisa y congruente con la solicitud. Adicional a lo anterior, la petición debe ser puesta en conocimiento del solicitante, toda vez que lo contrario tornaría ineficaz el derecho de petición que, se reitera, es de rango constitucional.

V. CASO EN CONCRETO:

5.1.- El problema jurídico a desatar consiste en determinar si la **UARIV** vulneró los derechos fundamentales de petición y a la vida digna del señor **OSCAR CAICEDO CALLEJAS** respecto de la solicitud y la respuesta otorgada por la entidad el 25 de febrero del presente año.

5.2.- A pesar de haberse indicado en el escrito tutelar que se aportaba por la accionante la respuesta otorgada por la accionada, la misma no se encuentra dentro de los archivos.

5.3.- Como respuesta, la **UARIV** emitió los siguientes comunicados dirigidos a la accionante:

- Comunicación **de fecha 29 de mayo de 2023:**

“Señor (a):
DORA MILENA CAICEDO CALLEJAS
LISETHFERNANDA08@HOTMAIL.COM
TELÉFONO: 3147859750

Asunto Comunicación en virtud de acción constitucional Código Lex.
7422236 D.I. 66681090 MN. N/A

Cordial Saludo,

Con el fin de dar respuesta a la petición elevada en escrito de tutela en relación con la indemnización administrativa reconocida a el señor OSCAR CAICEDO CALLEJAS por el hecho victimizante de Desplazamiento Forzado, le informamos que luego de verificar el Registro Único de Víctimas, OSCAR CAICEDO CALLEJAS presentó solicitud de indemnización administrativa en el marco de la Ley 1448 de 2011, la cual fue radicada con el No. 2351987-11156930, en donde se relaciona(n) la(s) siguiente(s) persona(s) que, bajo el procedimiento para otorgar la medida de indemnización administrativa, acreditaron su calidad de destinatario(s).

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS- OSCAR CAICEDO CALLEJAS

TIPO DOC IDENTIDAD - CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO DE DOCUMENTO - 94225668

PARENTESCO EN RELACION CON EL JEFE DE HOGAR/VICTIMA DIRECTA- JEFE DE HOGAR

PERSONA FALLECIDA - NO

Así las cosas, se ordenó el pago de la medida de indemnización administrativa aplicando la normatividad vigente para el momento en que se presentó la solicitud, sin embargo, de acuerdo con el reporte entregado por la entidad financiera, el/los destinatario(s), que se relacionan a continuación, no realizaron el cobro de la indemnización antes mencionada, por lo que la Unidad para las Víctimas en aras de salvaguardar los recursos públicos por concepto de indemnización administrativa, se vio en la obligación de constituirlos como acreedores

varios sujetos a devolución en cuentas de la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público¹.

NOMBRES Y APELLIDOS DESTINATARIO - OSCAR CAICEDO CALLEJAS

TIPO DOC IDENTIDAD - CEDULA DE CIUDADANIA

No. DOCUMENTO -94225668

PARENTESCO EN RELACION CON EL JEFE DE HOGAR / VICTIMA DIRECTA

JEFE DE HOGAR

PORCENTAJE -100%

RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO - 2245 del 19 de agosto 2021

Por consiguiente, debe realizarse el procedimiento de reprogramación de los recursos, para lo cual, la Unidad para las Víctimas a través de un enlace lo contactará para asesorarlo en el trámite correspondiente dependiendo de la causal de no cobro de los recursos asignados, esto con el fin de realizar la entrega efectiva de los mismos.

Es importante indicar que, en virtud del principio de participación conjunta, toda solicitud que no cuente con la documentación necesaria para dar trámite al proceso de su indemnización deberá ser complementada por la víctima. Cabe precisar que el proceso de reprogramaciones tiene un tiempo de trámite, dependiendo de la causal de no cobro, toda vez que deben ajustarse nuevamente a los procedimientos internos de pago de la medida.

Para la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, es importante contar con su opinión para mejorar nuestros servicios de atención al usuario. Para ello lo (a) invitamos a responder la encuesta de satisfacción que se encuentra en la página web <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/encuesta-de-satisfaccion/37436>, le agradecemos su participación." (Páginas 15-16 archivo digital 010)

5.4.- Teniendo en cuenta lo anterior, refulge para este Despacho Judicial que en el presente caso se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que el derecho fundamental de petición invocado por la señora **DORA MILENA CAICEDO CALLEJAS** en su escrito de tutela, al momento de proferirse este fallo ya no se encuentra conculcado, por lo que una intervención del juez constitucional en aras de garantizarlo resultaría ineficaz.

Lo anterior, como quiera que la **UARIV** atendió de manera clara, congruente y de fondo la solicitud elevada por la accionante ya que, por un lado le explicó a la accionante que, se la indemnización administrativa ya fue otorgada y que la misma no fue reclamada y que se suministrara acompañamiento para el procedimiento de reprogramación de recursos, lo anterior con el fin de realizar la entrega efectiva del mismo.

Lo anterior, le fue debidamente comunicado a la señora **DORA MILENA CAICEDO CALLEJAS** al correo electrónico aportado en su solicitud LISETHFERNANDA08@HOTMAIL.COM (página 7y 8 archivo digital 010).

29/5/23, 14:35

6-RESPUESTA-7422236-29 05 2023: Impugnaciones - Outlook

6-RESPUESTA-7422236-29 05 2023

Impugnaciones <Impugnaciones@unidadvictimas.gov.co>

Lun 29/05/2023 14:35

Para: LISETHFERNANDA08@HOTMAIL.COM <LISETHFERNANDA08@HOTMAIL.COM>

CC: 472 <correo@certificado.4-72.com.co>

1 archivos adjuntos (206 KB)

Respuesta a derecho de petición Lex 7422236.pdf;

Buen día,

Adjunto remitimos respuesta a la solicitud presentada por usted ante la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV –.

NOTA: Este correo ha sido enviado por un sistema automático. Por favor no intente responder a este mensaje, ya que este buzón electrónico no es revisado por ninguna persona.

Cordialmente:

GRUPO DE RESPUESTA JUDICIAL
UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS.



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

29/5/23, 14:36

Entregado: 6-RESPUESTA-7422236-29 05 2023: Impugnaciones - Outlook

Entregado: 6-RESPUESTA-7422236-29 05 2023

postmaster@outlook.com <postmaster@outlook.com>

Lun 29/05/2023 14:35

Para: LISETHFERNANDA08@HOTMAIL.COM <LISETHFERNANDA08@HOTMAIL.COM>

1 archivos adjuntos (58 KB)

6-RESPUESTA-7422236-29 05 2023;

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

LISETHFERNANDA08@HOTMAIL.COM

Asunto: 6-RESPUESTA-7422236-29 05 2023

En consecuencia, como quiera que, del análisis probatorio acopiado al expediente se logró determinar qué, fue con ocasión de la promoción de la presente acción constitucional admitida el **26 de mayo de 2023** (archivo 08), que la entidad accionada emitió el oficio **de fecha 29 de mayo de 2023**, con el cual dio respuesta de fondo a la solicitud radicada por la tutelante, deriva en el encausamiento de lo regulado en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, que establece claramente que la procedencia de la acción de tutela declina cuando el hecho vulnerador del derecho fundamental se ha superado o, simplemente, desaparecen para el momento del fallo las causas que dieron lugar a su interposición, pues la jurisprudencia ha considerado que, en esa hipótesis, ningún objeto tendría una determinación judicial de impartir una orden de amparo.

Así las cosas, teniendo en cuenta lo anterior, resulta forzoso concluir que, en el presente amparo constitucional ya no se encuentran amenazados los derechos fundamentales invocados por la tutelante en su escrito, al haberse configurado el fenómeno del hecho superado.

En mérito de lo expuesto, EL JUEZ NOVENO DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., “administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley”,

VI. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado dentro del asunto de la referencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a los intervinientes, a través del medio más expedito. **SECRETARÍA PROCEDA DE CONFORMIDAD.**

TERCERO: Si no fuere impugnada la decisión, envíese a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÚMPLASE

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the printed name.

CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ

JUEZ

AP